



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00607-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
ORDINARIO: 1100133331026-2012-00191-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, con el fin de obtener la devolución de los descuentos a ella realizados por aportes no efectuados a pensión por la suma total de **CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$109.406.892.00) M/CTE**, suma que resulta de la diferencia de las mesadas indexadas antes de la ejecutoria del fallo, más el mayor valor descontado por aportes de pensión y por concepto de intereses de mora de capital no pagado a partir del 1° de mayo de 2019.

Por lo anterior, y luego de verificado el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir la demanda, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la misma, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme con lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles *que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las **que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial**, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”*

Ahora bien, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción quedaron consagrados en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, señalándose los requisitos que deben reunir las mismas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. *Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*

- 1.** *La designación de las partes y sus representantes.*
- 2.** *Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
- 3.** *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 4.** *Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. *La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

En similar sentido, el artículo 82 del Código General del Proceso, también trae consagrados los requisitos que deben contener las demandas que se promuevan **en todo proceso**, de la siguiente manera:

- “1. La designación del juez a quien se dirija.*
- 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
- 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*
- 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.*
- 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*
- 8. Los fundamentos de derecho.*
- 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.*
- 10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.*
- 11. Los demás que exija la ley.”*

De la misma manera, el artículo 84 de la norma *ibídem* dispone:

“Artículo 84. Anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse:

1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.

- 2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85.*
- 3. Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del demandante.*
- 4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.*
- 5. Los demás que la ley exija”.*

Negrilla y subraya fuera de texto

Así las cosas, revisado el contenido de los enunciados normativos y al realizar la verificación de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda no cumple con la totalidad de estos, como se indica a continuación:

En primer lugar, debe decir el Despacho que la sentencia proferida en el proceso ordinario, dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ana Isabel Camargo Ángel, en cuantía equivalente al 75%, del salario promedio mensual del último año de prestación de servicios, esto es, **del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, con efectividad a partir del 1° de enero de 2012**, teniendo en cuenta como factores salariales el sueldo, incremento de antigüedad, bonificación por servicios, prima de navidad, prima de servicios, incentivo por desempeño grupal y prima de vacaciones.

Sin embargo, en el libelo de la demanda ejecutiva no se explica la razón exacta de la inconformidad con los valores tomados por la entidad o de la forma en la que se dio cumplimiento a la sentencia, siendo ello indispensable para analizar si hay lugar o no a librar mandamiento ejecutivo, y el monto respectivo.

Frente a este derrotero, al analizar las pretensiones de la demanda ejecutiva las mismas se tornan confusas, habida consideración que, el Profesional del Derecho afirma, que la entidad ejecutada le adeuda a la ejecutante la diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre de los años 2012 a 2019; sin embargo, se debe decir que el cuadro de liquidación allegado por la activa (fls.29), no explica de donde resultan los valores pretendidos y que según ellos son los que causan la diferencia entre la sentencia y la ejecución, que en su consideración ascienden a **\$30.829.936**.

Aunado de lo anterior, al revisar la liquidación realizada por la UGPP en la Resolución RDP 007484 del 6 de marzo de 2019², la prima de servicios se encuentra liquidada con un valor superior a la liquidación obtenida por la ejecutante, a su vez que, dicho monto coincide con aquel que devengó la señora Camargo Ángel en el último año de prestación de servicios³, tal y como fue ordenado en la sentencia de precedencia. No siendo en este sentido claro “lo pretendido” en la demanda, pues aun cuando se menciona un valor, este no cuenta con soporte que permita evidenciar que en efecto existe una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de la UGPP.

De la misma manera, no queda claro para el Despacho la fecha en que la parte ejecutante pretende se haga efectivo un eventual pago, pues afirma que el total de las diferencias de las mesadas indexadas por parte de la ejecutada es de \$30.829.936 antes de la ejecutoria del fallo, es decir 21 de septiembre de 2018, cuando la ejecutoria del fallo de segunda estancia se

² Folio 17.

³ Folios 25 en adelante.

encuentra desde el 10 de septiembre de 2018, situación que genera incongruencias en el pedimento del actor.

Igualmente sucede con los valores que pretende el actor sean ejecutados por concepto de capital adeudado por concepto de los descuentos generados por aportes para pensión e intereses de mora no pagados, en razón a que, no explica de donde salen dichos valores, a su vez que, no establece fórmula matemática alguna, para afirmar que dichos valores son adeudados por la entidad ejecutada.

Por tal razón, la activa deberá indicar con toda precisión, en qué consiste la diferencia que en su consideración existe entre el acto de ejecución y la sentencia del proceso ordinario, **señalando con exactitud los valores con los que no se encuentra de acuerdo** y que fueron determinados en la Resolución RDP 007484 del 6 de marzo de 2019, pues no es posible para el Despacho realizar conjeturas propias para librar mandamiento de pago conforme a lo que considere, sino de acuerdo a lo solicitado por quien demanda, lo que a su turno permitirá a la entidad manifestarse y ejercer su derecho de defensa de manera puntual frente a lo pretendido.

Por ende, el interesado debe explicar de manera clara y concisa las inconsistencias en la liquidación realizada por la entidad y la prueba para demostrar dicho yerro.

ii. De la misma manera, la demanda debe contener cada ítem indicado en el artículo 82 del Código General del Proceso, antes transcrito, aplicable para el presente asunto, en tanto no existe justificación legal que permita omitir alguno de ellos, motivo por el cual el apoderado de la parte demandante deberá adecuar la demanda a los presupuestos contenidos en dicho artículo, en tanto la demanda carece de **algunos de los acápites** indicados en la norma en mención, siendo obligatoria la inclusión de cada uno de ellos.

iii. Finalmente, el Despacho echa de menos el poder para iniciar el presente proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 77 del Código General del Proceso señala, que dentro de las facultades del apoderado se encuentra aquellas actuaciones que se realizan con posterioridad a la sentencia, también es cierto, que la norma en mención indica, “*en el mismo expediente*”, situación que no ocurre en el presente asunto, pues como es de conocimiento del apoderado de la parte actora, al proceso ejecutivo radicado por la señora Castro Vargas, se le asignó un nuevo número de proceso, por lo que no se puede inferir que se está cumpliendo el trámite de ejecución en el mismo expediente.

Por lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del Código General del Proceso, se deberá aportar el documento idóneo para demostrar la capacidad con base en la cual actúa el abogado GILBERTO DUQUE OSPINA,

pues no obra poder que lo acredite como representante judicial de la señora ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL, para iniciar el respectivo proceso ejecutivo.

Bajo los anteriores parámetros, las pretensiones de la demanda y los anexos de esta deben ser ajustados, atendiendo las consideraciones realizadas, para establecer que la demanda haya sido presentada en debida forma y que la obligación cobrada cumpla con la carga de ser clara, expresa y actualmente exigible.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA EJECUTIVA instaurada por **ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.**


SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, para efectos de las notificaciones electrónicas que se deben surtir con posterioridad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 8 DE JULIO DE 2020 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d50f6e0bb8a6ddf926020a9fc6c537121abf075634e96a9e29e2410b46787807
Documento generado en 04/07/2020 07:02:49 AM